

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril 13 de 1875.

Vistos los autos sobre competencia promovida por la comandancia militar de Acapulco al Juzgado de 1ª instancia del mismo, para conocer de la causa instruida contra el Teniente Coronel Joaquin Lallave, con motivo de los sucesos ocurridos en el pueblo de «Dos Arroyos» en el Estado de Guerrero, el día 24 de Agosto del año próximo pasado; los informes que en apoyo de su respectiva jurisdicción rindieron las autoridades que entre sí compiten: lo pedido ante esta 1ª Sala por el C. Fiscal Interino, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y verconvino.

Considerando: que los hechos que tuvieron lugar en «Dos Arroyos» en uno de los días del mes de Agosto del año anterior, en manera alguna tienen conexión con la disciplina militar, que la ley de 27 de Setiembre de 1857, solo reserva para conocimiento de la jurisdicción del fuero de guerra, los expresados hechos; que por el contrario, esa misma ley en la frac. 3ª del caso 2º del art. 2º, expresamente determina, que quedan sometidos á la jurisdicción ordinaria entre otros delitos allí enumerados, el de resistencia y desacato á la autoridad civil, que es el que precisamente se persigue en la causa que ha dado motivo á esta competencia; que el art. 13 de la Constitución federal textualmente previene, que el fuero de guerra solamente subsiste para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar; de cuya redacción, así como por tratarse de una cosa odiosa como es un fuero privilegiado, se infiere, que en caso de interpretación de ese art. debe estarse por la restrictiva, tanto mas cuanto que el espíritu de la expresada Constitución está basado bajo los principios de una perfecta igualdad ante la ley. Por estos fundamentos y de conformidad en lo principal pedido por el C. Fiscal, se decreta: Que el C. Juez de 1ª

TOMO VII—PARTE II.

instancia del Puerto de Acapulco, es el competente para seguir conociendo de la causa instruida con motivo de los acontecimientos que tuvieron lugar en el pueblo de «Dos Arroyos» en el Estado de Guerrero.

Remítanse las actuaciones al Juez de 1ª instancia de Acapulco, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, remitiéndose copia igual al comandante militar de Acapulco, para su conocimiento; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos, los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. —*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Ignacio Altamirano.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Son copias. México, Mayo 10 de 1875.  
—*Enrique Landa.*

## JUICIO

*Seguido en el Juzgado de Distrito de Michoacan por el Erario Federal, contra el Lic. José M. Herrera, sobre el pago de \$ 3,520 66, saldo de los intereses rematados á la hacienda del «Salitre», y adjudicados al Fisco por falta de postores.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

Habiéndosele demandado por parte de este Ministerio al C. Lic. José María Herrera, la cantidad de tres mil quinientos veinte pesos sesenta y seis centavos, que por desvinculación y redención, adeuda á la Hacienda Federal, segun aparece de la liquidación de fs. 58 á la 61 de este expediente, manifestó en contestación á la de-

manda, que al redimir el capital de mil cuarenta y tres pesos que reconocía el rancho de San Rafael, se le había exigido íntegra ésta cantidad, y no en parte proporcional de bonos y numerario que la ley determinó. Como ésta excepción no se halla en manera alguna justificada, debe estarse á las constancias fehacientes de la oficina, que obran en autos.

La segunda observacion que hace el demandado, se refiere á la parte de réditos de que habla la liquidacion de fs. 58, pues en su concepto, no deben causarse éstos, sino mediante el pacto expreso ó desde el día en que judicialmente se hace el cobro de lo principal. Como la liquidacion citada se funda á su vez en el convenio de la foja 33, firmado por el mismo Herrera y por el C. Jefe de Hacienda, y en la cláusula 3ª se dice: que el deudor reconocerá á la Hacienda Pública, el capital de que habla, por el término de un año, sin causar rédito; es evidente que éste debió causarse, pasado el término del convenio, dentro del cual debió haber hecho el pago, supuesto que dicha escencion tan solo se referia al año.

La última observacion, es relativa á que en la cuenta de la Jefatura se comprenden adeudos de particulares, como son las multas y lo que resulte á favor del dueño del Salitre, por la enagenacion que se hizo para cubrir adeudos fiscales. De aquí infiere el responsable, que estas cuentas de particulares, no debe exigir las la oficina de Hacienda, sino los mismos interesados ante el juez competente.

Por lo que toca al adeudo del rancho del Salitre, debe advertirse, que la Jefatura hizo la enagenacion á Herrera, para cubrirse de un crédito que tenia contra el propietario, y que habiendo un sobrante á favor de éste, nadie mas es responsable que dicha oficina, y por lo mismo, con sobrada justicia lo exige de Herrera, á quien enajenó el Salitre.

En cuanto á las multas, baste decir, que

como un accesorio de lo principal, deben exigirse juntamente con este, siendo responsable la Jefatura de la distribucion que la ley le previene hacer á las personas que intervienen en la ejecucion.

Lo expuesto basta para contestar satisfactoriamente las observaciones del demandado. Pero á mayor abundamiento, se registra á la foja 37 del expediente formado por la oficina de Hacienda, la conformidad del responsable con la liquidacion practicada y á la cual se refiere la de la foja 58 á la 61.

Como este expediente debe considerarse como un documento auténtico, segun lo prevenido en el art. 662 del Código de Procedimientos civiles, y siendo comprendidos por el 660, entre los instrumentos públicos que hacen prueba plena, segun el 776, el Promotor pide, por estos fundamentos y los antes aducidos: se condene á la parte demandada al pago de los tres mil quinientos veinte pesos sesenta y seis centavos, y al de las costas legales, dejando á salvo los derechos de la Hacienda Pública, para repetir, si necesario fuere, contra los terceros poseedores de los bienes enajenados.

Morelia, Octubre 12 de 1874.—N. Calzallero.

Es copia que certifico. Morelia, Octubre 29 de 1874.—Isidro Aleman.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Morelia, Octubre 27 de 1874.

Vistos: el C. Jefe de Hacienda del Estado, acompañó con oficio de 17 de Junio de este año, el expediente número 1,394, formado por dicha oficina para cobrar al C. Lic. José María Herrera, la cantidad de tres mil quinientos pesos sesenta y seis centavos, de que es deudor al Erario Federal, por saldo de los intereses rematados á la Hacienda del Salitre en 1861 y vendidos á dicho Herrera por la Jefatura en 1862, bajo las condiciones de fojas 39. Corrido traslado al C. Promotor en la misma fecha

(17 de Junio de 1874,) formuló su demanda en contra del repeñido Herrera, vecino de esta ciudad, exigiéndole en vía sumaria el pago de la referida cantidad, (fojas 65.) Dado traslado al Sr. Herrera de esta demanda, la contestó el 10 de Julio, haciendo algunas observaciones á la liquidación de fojas 58 que sirvió de base á los procedimientos del fisco y de fundamento á la demanda. Se abrió á prueba el juicio en 5 de Setiembre, y no habiendo las partes producido ningunas, despues de los alegados de estilo, se citó para sentencia en 20 del actual; y resultando de las constancias de autos:

1º El Br. D. Porfirio Herrera, era dueño de una suma de doce mil setecientos sesenta y seis pesos veintinueve centavos, que por capitales y réditos de varias capellanías de sangre, le reconocían las haciendas de Bellas Fuentes, Ayumba, La Magdalena, Arapahucano y el Salitre; y habiendo venido las leyes de desamortización y nacionalización de los bienes del clero, no habiéndose presentado á desvincularlas conforme á la ley y declarado su hermano D. José María el sucesor inmediato, la Jefatura procedió á hacer efectivo el cobro de dichos capitales, empleando las facultades coactivas que le dan las leyes.

2º Formada la cuenta de la mitad que como á sucesor corresponde al Lic. Herrera, y que se registra á fojas 37, tocaron á éste seis mil trescientos ochenta y tres pesos catorce y medio centavos, que se le pagaron con las partidas que constan en la data de dicha cuenta, y solo se le quedaron debiendo mil trescientos veinticinco pesos cincuenta y seis centavos, cuya cuenta reconocida por el interesado, se conformó con ella, á excepcion de la partida ciento treinta pesos treinta y siete y medio centavos de una multa, con cuya observacion estuvo conforme la Jefatura, montando en consecuencia el saldo á favor de Herrera, á mil cuatrocientos treinta y cinco pesos noventa y tres centavos.

3º El mismo Sr. Herrera para pagarse de esta suma, presentó á la Jefatura las proposiciones de fs. 33, tomando por las dos terceras partes de su valor, los cobies y terrenos del Salitre, adjudicados al Erario, comprometiéndose á entregar el escociente tan luego como realizara aquellos objetos, ó reconociendo su importe en caso de no realizarlos pronto, por un año y sin réditos. Estas proposiciones fueron presentadas en 8 de Enero de 1862 y aceptadas el 4 del mismo, entrando en consecuencia é inmediatamente en posesion de tales bienes, mediante las escrituras respectivas, como consta de la diligencia de fojas 45 vuelta.

4º Estando así las cosas y corriendo el término fijado en el anterior convenio, vino la guerra de intervencion que paralizó todos los negocios de esta clase, y ni el Sr. Herrera se presentó á hacer el pago de lo que adeudaba, ni la Jefatura le cobró. Restablecido el orden constitucional y apareciendo de los libros y constancias de la Jefatura, que el Sr. Herrera no había aun pagado y que ya había, desde Junio de 1867 (fojas 62) traspasado el dominio de los bienes que aquella le vendió, á D. Marcelino Espino, procedió á formar la liquidación de fs. 58, por la que resulta, que el deudor es responsable al Erario, de la cantidad líquida de tres mil quinientos veinte pesos sesenta y seis centavos; y

Considerando: 1º Que la demanda está apoyada en la liquidación que se acaba de citar y que ésta reconoce como fundamentos: Primero: La cuenta del Sr. Herrera llevada por la Jefatura, cuyo resumen consta en el documento de fs. 37, que ha sido reconocido por el demandado y firmado de conformidad con la enmienda pedida por él. Este documento, segun los arts. 660, frac. 2ª, 662 y 776 del Código de Procedimientos y las leyes 1ª y 114, tit. 18, Partida 3ª, hace plena prueba. Segundo: El documento de fs. 33, que es el convenio celebrado entre el demandado y el acreedor

fuente única de los derechos y obligaciones de ambos contratantes, y el que también forma prueba plena por hallarse en el mismo caso del anterior. Tercero: La constancia de fs. 45 vuelta, que es la confesión paladina del demandado, de haber recibido los bienes que la Jefatura le vendió con las condiciones del convenio de fs. 33. Esta es otra prueba que conforme á los arts. 774 y 776 del Código citado, y leyes 7ª, tít. 13 Partida 3ª y las ántes citadas, hacen entera fe.

2ª Que el demandado no niega la obligación que tiene para con el Erario Federal, y únicamente observa: Primero. Que la partida de mil cuarenta y tres pesos que se le carga en la cuenta de fs. 37, no debe ser toda en dinero, sino una parte en este, y el resto en bonos, puesto que proviene de la redención que él hizo de ese capital que reconocía la Hacienda de San Rafael: Segundo. Que la suma de mil trescientos noventa y nueve pesos setenta y cinco centavos en que se aumenta su crédito por réditos al seis por ciento, causados desde 7 de Febrero de 1863, hasta igual fecha de 1874, no se le debe cargar por no estar obligado á los intereses, que solo se causan cuando expresamente se pactan, ó desde que se hace el cobro judicialmente: Tercero: que en la liquidación de fs. 58, está también incluida una suma, importe del sobrante del Salitre, y de gastos de multas y remate, y que él no se cree obligado por esto al Erario, sino á particulares, conforme á la tercera de las proposiciones de fojas 33.

En cuanto á la primera observación, es justa, pues habiendo sido redimido por el Sr. Herrera el capital de mil cuarenta y tres pesos que reconocía la Hacienda de San Rafael á obras pías, la operación debió haberse hecho en las especies demarcadas por la ley, y no toda en dinero, y de ella, debe por lo mismo, resultar un sobrante á favor del Sr. Herrera. En cuanto á la segunda, carece de justicia, pues además de haber convenido él mismo, que solo el pri-

mer año no causara réditos la cantidad que resultara debiendo al Erario; no es exacto que el interés solo se causa cuando expresamente se pacta, pues hay casos en que esto se debe satisfacer, aun cuando no se estipule, como lo enseña Eseriche en su diccionario de Legislación, artículo interés punitivo, párrafo 2º, y con apoyo de la ley 2ª, tít. 14, libro 5º del Fuero Juzgo; no viniendo por lo mismo al caso las de la Novísima que cita en su alegato, por referirse á otros muy diversos, ni los artículos del Código Civil, que no regía cuando el Sr. Herrera contrajo aquella obligación. Respecto de la tercera, no hay verdad ni en su aseveración, ni en su fundamento, porque en la liquidación de fs. 58, no se cargan al Sr. Herrera, ni la cantidad que sobra al Salitre, ni la que importan las multas de cobro, sino de la que suma su adeudo, se dedica una parte para estos pagos; porque no habiéndolos hecho el Sr. Herrera, según se comprometió en el convenio de fs. 33, y habiendo él dispuesto de todos los bienes que se le enagenaron, aquella obligación es de la Jefatura, que nunca debió haber celebrado el convenio referido, sin haber asegurado competentemente, tanto los intereses del fisco, como el de sus agentes.

Por todo lo expuesto y con fundamento de las leyes citadas y del art. 846 del Código de Procedimientos, como pide el C. Promotor, se falla en definitiva:

1ª Se condena al C. Luc. José María Herrera, á pagar al Erario Federal, en numerario, la cantidad de dos mil ochocientos noventa y cuatro pesos ochenta centavos, y en bonos ó créditos del mismo, reconocidos, la de seiscientos veinticinco pesos ochenta centavos.

2ª La anterior declaración no perjudica los derechos del Erario, para repetir contra quien corresponda, en caso de insolvencia del Sr. Herrera.

3ª No se hace condenación en costas, por no haber temeridad.

Lo decretó el C. Juez de Distrito de Michoacan. Doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Ante mí.—*Isidro Aleman*.

Es copia que certifico: Morelia, Octubre 29 de 1874.—*Isidro Aleman*, secretario.

*Redimento del O. Promotor Fiscal del Tribunal de Circuito.*

C. Magistrado de Circuito:

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic. José María Herrera, compró á la Hacienda Pública Federal los terrenos del Salitre y Carbonera y una cantidad de cobre que seguramente pertenecía á la misma negociacion, obligándose á pagar dentro de un año, sin causa de réditos, lo que los interesados y el fisco salieran alcanzando. Para comprender esto hay que fijarse en que el Lic. Herrera tenia cuentas pendientes con la Jefatura de Hacienda de Michoacan, por la desvinculacion de una capellanía de sangre. El convenio quedó perfecto en 7 de Febrero de 1872. El año siguiente, cumplido el plazo, nada pagó Herrera. Conforme á la liquidacion que obra á fs. 37 alcanzaba el comprador 1325 pesos 56 y medio centavos, en 10 de Enero de 1872.

El reconocimiento del alcance en contra de la Hacienda Federal, consentido por el representante de ésta y por el deudor, no puede ser materia de controversia, y es por decirlo así, uno de los puntos sobre los que no cabe ya discusion alguna, segun lo ha manifestado el C. Promotor de primera instancia. El otro punto fuera de duda es contenido de las cláusulas del contrato celebrado con la Hacienda Pública, el cual se registra á fs. 38.

Desde luego se nota la falta de todos los requisitos que para enagenacion de los bienes nacionales ha establecido la ley de 13 de Julio de 1859. Parece que la Hacienda Federal se adjudicó los bienes rematados, y acto continuo los pasó al C. Lic. Herrera. No gozó éste de las ventajas de dar dos

quintas partes en efectivo y tres en bonos; sino que simple y sencillamente se obligó á entregar el saldo que correspondiese al erario, hecha la respectiva liquidacion. Esta no se formó inmediatamente, sino once años despues, acaso porque la entrega del dinero se habia de efectuar un año despues.

El valor de los bienes embargados á Herrera ascendió á 3576 pesos 85 centavos, deducida ya una tercera parte de su real precio. Se le abonan 1325 pesos 56 centavos, que tenia en poder del fisco, y por costas, 130 pesos 38 centavos, queda en consecuencia reducido el adeudo á 2120 pesos 91 centavos. De éstos, 1104 pesos 49 centavos, pertenecen á la Federacion, debiéndolos haber entregado Herrera desde Febrero de 1873, si se hubiera hecho la liquidacion. Los réditos de los 11 años transcurridos, suman 728 pesos 92 y medio centavos, y unidos al capital lo elevan á 1833 pesos 41 centavos, que reza la liquidacion de fojas 59.

Que el erario era responsable á los demas partícipes, es falso, porque sus obligaciones nacen de los actos administrativos arreglados á la ley, y no de los arbitrarios de sus agentes subalternos. Son personalmente responsables los Jefes de Hacienda que han intervenido en este asunto, ya de haber obligado al fisco sin facultades para ello, ya de la morosidad en formar la liquidacion y exigir su monto. Y es bien sabido, y así lo entienden las leyes 12 y 13, tít. 11, lib. 6 de la Nov. Rec., que los intereses comienzan á correr desde la interpelacion judicial; pero es especial en los contratos de compra venta, que aquellos corren desde que se retiene el precio ó parte llegado al plazo de pagarlo, (L. 5, tít. 4, lib. 5 del Fuero juzgo, Escrihe, art. permit.)

Lo que falta que abonar en la liquidacion de fs. 58, es la parte correspondiente de contribuciones, que Herrera no debe sufrir por capitales ajenos, quedando al fisco federal sus derechos á salvo para repeticiones, si no debe pagarlos al Estado.

En vista de estas consideraciones, el Promotor fiscal pide que revocándose la sentencia de primera instancia, se condene al C. Lic. José María Herrera al pago de 1833 pesos 41 centavos, que adeuda al fisco federal, con deducción de la parte de contribuciones que por el capital hubiere pagado.

Querétaro, Diciembre 10 de 1875.—*Luis Castañeda.*

Es copia que certifico. Querétaro, Febrero 15 de 1875.—*Ramon Reynoso, Srto.*

### *Sentencia del Tribunal de Circuito.*

Querétaro, Enero 22 de 1875.

Vistos: el C. Jefe de Hacienda de Morelia, remitió el día 17 de Junio del año próximo pasado al C. Juez de Distrito de ese Estado, el expediente seguido contra el C. Lic. José M. Herrera, sobre pago de tres mil quinientos veinte pesos, sesenta y seis centavos, de que era deudor al Erario Federal, por saldo de los intereses rematados á la Hacienda del "Salitre" consistentes en los potreros del "Agua caliente, Salitrillo y la Carbonera;" y en cuatrocientas setenta y ocho arrobas y media de cobre, lo que se adjudicó al Erario Público, por falta de postores por la cantidad que reconocía, réditos y gastos de cobranza, procedente de una capellanía desvinculada, por no haberse sujetado su capellan Presbítero D. Porfirio Herrera á lo preceptuado en la circular de 12 de Agosto de 1859, ni á lo prevenido en la ley de 5 de Febrero de 1861, ni haber existido la subrogación á que se contrae su art. 59, de cuyo capital se hizo dueño el C. Lic. Herrera, aceptada sus proposiciones concernientes á la compra de aquel, formuladas en el escrito fecha 3 de Enero de 1862, fs. 33 fte. y vta; y como no se hubiese hecho pago total del adeudo, y resultasen vendidos los terrenos á la testamentaria del C. Marcelino Espino, cuyo representante desconoció el crédito, se hizo el negocio contencioso y por tanto sujeto á

la decisión judicial. Visto lo alegado por las partes en primera instancia, lo mismo que lo sostenido en la presente, es de considerarse y se considera:

1º Que la parte del Lic. Herrera, estuvo conforme en hacer la paga no solo del capital que comprase en el término estipulado, sino también lo que se devengase por derechos de embargo, avalúos etc., cuya conformidad aparece al margen del oficio fecha 7 de Febrero de 1862, fs. 47 á la 48 fte; con la reforma á que se contrae en su final, en cuyo caso contrajo obligación el deudor, según lo prevenido en la ley 1ª, tít. 1º, lib. 1º de la Nov. R. e., con la particularidad de ser puesta en documento concerniente á liquidación, con fuerza plena que le dá la ley 1ª y 114, tít. 18, part. 3ª y sin que pueda tener lugar la pretensión del reo, de arreglarse con los acreedores de costas, en razón de lo ántes expuesto sobre conformidad en pagarlos, como procediendo ese adeudo de la ley de 20 de Enero de 1837 que concede facultad económica coactiva, refuyó en la Jifatura obligación en hacer el pago á empleados de ella, ó á personas nombradas al efecto, formando por tanto un todo, el capital objeto del juicio, con los honorarios que se reputan accesorios.

2º Que lo expuesto concerniente á la obligación del Lic. Herrera, se estima inherente al contrato, en razón de que solo así habría perfeccionándose surtiendo sus efectos de transferir el dominio, según lo prevenido en la ley 46, tít. 28, part. 3ª, sujetándose al plazo estipulado, según lo ordenado en la 8ª tít. 14, part. 5ª; de manera que justificado como lo está el contrato según lo dicho en el párrafo precedente, con el aditamento de haber estado conforme el deudor sin haber alegado en juicio excepción que destruyese su anuencia, surtió los efectos que tiene la confesión, ya se estime hecha en juicio ó fuera de él, con citación del empleado en rentas; y en consecuencia, tuvo y tiene su verificativo lo pre-



venido en las leyes 2ª, tít. 13, part. 3ª y 7ª, tít. 13, part. 5ª.

3. Que los réditos que ha devengado el capital desde su enagenacion en favor del comprador, están líquidos con sujecion á la tercera proposicion del contrato fecha 3 de Enero de 1862, es decir, no comprendidos los del primer año, cuya cláusula relativa es clara en sí; porque si se expresó la época en que el capital no devengaba intereses, rectamente se infiere que trascurrida subsisten ellos afectos al capital, so pena de infringir el principio de que nadie debe enriquecerse con perjuicio de otro, cuyos intereses se deben en los contratos en general para evitar daño ó menoscabos al capital; y es por eso que enseña Escriche en su doctrina "Paga," de que esta se entiende á la obligacion de dar, lo que es extensivo á todos los contratos en que por falta de cumplimiento de ellos se cause menoscabo, teniendo por tanto aplicacion lo prevenido en la ley 3ª, tít. 3ª, 4ª, tít. 14, 3ª y 5ª tít. 6ª, 14, tít. 5ª part. 5ª.

4. Lo expuesto con respecto á réditos equivalentes á menoscabos que son los mismos segun dice el autor citado en su artículo "Daños y perjuicios," lo que tambien se enseña por Cobarr. Var. Resol., lib. 2ª, cap. 3ª núm. 6, refiriéndose á la glosa de la ley 8ª tít. 1ª part. 5ª, que es equivalente á privacion de utilidad, provecho, ganancia ó lucro, se deben por la naturaleza del contrato de compra venta, muy distinto del de mútuo á que se refieren las leyes 12 y 13, tít. 11, lib. 10 de la Nov. Rec. que se causan, dicen, desde el dia en que se pone la demanda, castigando la tardanza en no haberlos cobrado en tiempo, y á ese contrato de mútuo se contraen las sentencias de 31 de Marzo de 1856 y la de 20 de Enero de 1857, insertas en la "Gaceta de los Tribunales," pág. 513 fto. y vto.; de manera que aplicando la regla de "*jura juribus concordat debet*," resulta no haber contradiccion en lo ántes expuesto, mediante lo distinto del caso ventilado con diferencia ab-

soluta de la accion, razon por que es de aplicarse y se aplica lo dispuesto en la ley 5ª, tít. 4ª, lib. 6ª del Fuero Juzgo, á que se contrae el autor Escriche en su artículo "Interés punitivo."

5. Que retrotrayéndose á la cuestion de multas y honorarios, se deben segun se ha dicho, en cumplimiento de lo estipulado por el C. Lic. Herrera, en la proposicion tercera del convenio fecha 3 de Enero de 1862, en razon de constar vendidos los bienes embargados á la testamentaria de Espino; y por tanto sin poder entregar parte de ellos á los interesados por honorarios, sino la cantidad pecuniaria á la Jefatura de Hacienda de Morelia, afecta inmediatamente al pago por la causa de que proceden.

6. Que en materia de contratos se reputan sus pactos como ley, que obligan segun lo prevenido en la 1ª, tít. 1ª, lib. 10 de la Nov. Rec. y hé aqui porque hay que sujetarse á lo prevenido en el documento convenio, aceptado á pesar de no haberse guardado al efecto las solemnidades legales, en cuyo documento se contrae obligacion de pagar la cantidad pertenciente al Erario público demandado en autos, con la particularidad de que, segun lo estipulado, se pagó Herrera del resto que le correspondia por la mitad de la capellania de su hermano: fué en su favor la deducccion de la tercera parte sobre el valor de lo embargado, segun es de verse á fs. 30 vta., y no se ha hecho el pago al Erario de la cantidad que le pertenece, á pesar de los años transcurridos; de manera que, estipulándose en el contrato el pago al Erario, debia ser en dinero efectivo; y como en ese convenio apareció arreglo sobre exhibicion de bonos, claro es que no tienen lugar éstos, por no ser el caso á que se refieren los arts. 11, 12 y 15 de la ley de 13 de Julio de 1859, ni la circular de 12 de Junio de ese año, ni con lugar lo prevenido en el art. 56 de la ley de 5 de Febrero de 1861, puesto que el pago de bonos es en favor de los capellanes, censatarios, ó de los que se subrogan en su

lugar, cuya gracia no es aplicable al Lic. Herrera en razon de no ser denunciante, no haberse subrogado en el crédito, sino constituyéndose su comprador y obligado directamente por tanto, á pagar su intrínseco valor en los términos del convenio, cuyos bienes á que se refiere, tienen en sí la hipoteca tácita en favor del fisco, segun lo prevenido en las leyes 14 y 23, tit. 13 Part. 5ª.

Por lo espuesto, mediante los fundamentos expresados, los demás razonamientos referidos en lo conducente de la sentencia de primera instancia, que no se opongan á la presente, y con fundamento del art. 82 de la ley de 4 de Mayo de 1857, fallo:

1ª Se condena al C. Lic. José Maria Herrera á pagar á la Jefatura de Hacienda de Morelia, la cantidad de tres mil quinientos pesos, setenta y seis centavos en efectivo, como saldo del crédito afecto al Erario público, sin perjuicio de los derechos que le corresponden en los bienes tácitamente hipotecados al fisco, si el C. Herrera no satisface, en caso de insolvencia, la cantidad expresada.

2ª No se hace condena de costas, por no resultar temeridad en lo alegado por la parte demandada.

Y quedando revocada la sentencia que pronunció el C. Juez de Distrito de Morelia á 27 de Octubre del año próximo pasado, notifíquese y ejecútese caso de conformidad, librandola Secretaria los recados que corresponden; é insertándose la presente en oficio, librese al Juez citado para que lo notifique á Herrera y lo devuelva con lo que esponga: remítase copia de esta sentencia al "Semanario Judicial" y dígame al Juez citado, lo mismo que á su Promotor Fiscal, fijen su atencion, en que el Código de procedimientos civiles, fué expedido para el Distrito de México y Territorio de la Baja California.

El C. Magistrado de Circuito, actuando con testigos de asistencia por estar con licencia al C. Secretario, lo decretó y firmó. Damos fé:—*Aurelio Ramis Portugal.*—

*Antonio Tejeda.—Francisco Guzman.*

Es copia que certifico. Querétaro, Febrero 15 de 1875.—*Ramon Reynoso*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril 23 de 1875.

Vistos los autos seguidos por el erario federal contra el Lic. José M. Herrera, sobre pago de la cantidad de 3520 pesos 66 centavos, saldo de los intereses rematados á la hacienda del «Salitre» y adjudicados al fisco por falta de postores. Las sentencias de primera y segunda instancia respecto de la que suplicó la parte del Lic. Herrera, cuyo recurso le fué admitido, habiéndose fijado el término de seis dias contados desde el de la notificación, para que se presentara á esta Corte á mejorarlo. Lo pedido ante esta 1ª Sala por el C. Procurador General interino, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que segun la ley 3ª tit. 29, Lib. 11 de la N. R. el que interpone un recurso como el de que ahora se trata, tiene la obligacion de presentarse ante el Superior que de ese recurso deba conocer, dentro del término que le fije el Tribunal, ante quien se interpone. Que el suplicante Lic. Herrera, en manera alguna ha cumplido con lo prevenido en la expresada ley, puesto que aun hoy no se ha presentado todavia ante esta Corte Suprema á mejorar y seguir su súplica que interpuso. Que la parte apelada, representada por el C. Procurador General ha pedido se declare desierto el recurso de súplica y ejecutoriada la sentencia de 2ª instancia de conformidad con lo pedido por el Ministerio público, se decreta:

1ª Es de darse y se dá por desierto el recurso de súplica que interpuso ante el Tribunal de Circuito de Querétaro, contra la sentencia de segunda instancia pronunciada por dicho Tribunal en 22 de Enero último.



2º La expresada sentencia ha causado ejecutoria, y debe producir los efectos respectivos.

3º Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito, de que procedan, con copia certificada de esta sentencia para su conocimiento. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*J. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Abril 24 de 1875.—*Enrique Landa*, secretario.

## AUTOS

*Promovidos por la Hacienda pública, con motivo de la cesion de bienes que D. Juan N. Marguán hizo en beneficio de sus acreedores.*

*Pedimento del O. Promotor fiscal*

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que en la audiencia anterior expuso, que se conformaba con el proyecto de graduacion presentado por el síndico, siempre que se entendiera que el único de los acreedores que debía pagarse antes que el fisco, debía ser la casa de los Señores Hernandez Herms. y Cº por lo que á estos se les debe, y que luego debía cubrirse lo de la Hacienda pública; porque en efecto, así parece en justicia que debe ser, pues siempre se reputó por de Marguán toda la casa y aun hasta él mismo la propuso en lugar de fiadores á la Administracion General del ramo; y solo ahora que ha hecho cesion de bienes, viene declarando, que la casa, la mitad, debe

TOMO VII—PARTE II.

ser de sus hijas por su legítima materna. Al Fiscal no le incumbe entrar en las cuestiones que nacen naturalmente de tal declaracion hecha á última hora, y solo ha querido esponer el privilegio que tiene el Fisco por la hipoteca tácita legal que tuvo en los bienes del fallido, para ser preferido en el pago á los demás acreedores. Que con respecto á lo que se anuncia sobre no conformidad de Marguán con el cargo que le resulta en sus cuentas, basta solo saber que, la liquidacion de que resulta tal cargo, está hecha por una oficina que en sus operaciones merco y debe dársele fé pública; que esta hecha tambien esa liquidacion con presencia de las mismas cuentas rendidas por el interesado, á quien sin duda hoy nada importa que sus bienes sean de la Nacion ó de sus demás acreedores; y últimamente que, mientras el expresado Marguán no conteste satisfactoriamente á esos cargos y á las observaciones claras y muy minuciosas que se le hicieron por la General del ramo, al glosarle sus cuentas, la Hacienda pública tiene á su favor la presuncion vehementísima de la legitimidad de su crédito, con lo que basta para que ella deba ser preferida en el pago á todo otro acreedor, no hipotecario privilegiado, expreso anterior.

Que hechas estas aclaraciones, está conforme con el proyecto de graduacion presentado por el Síndico del concurso, y pide que en tales términos se sirva ese Juzgado aprobarlo, mandando se haga efectivo pago á la Hacienda pública de lo que se le adeuda.

Monterey, 3 de Marzo de 1870.—*Lic. Elizondo.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Monterey, Diciembre 14 de 1872.—*Antonio María Elizondo.*

*Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Monterey, Setiembre 29 de 1871.

Vistos estos autos que comenzó á instruir el C. Juez 2º de Letras de esta Capital, con motivo del ocurso que el 25 de Mayo